

*Naciones Unidas*  
**ASAMBLEA  
GENERAL**



**CUADRAGESIMO SEGUNDO PERIODO DE SESIONES**

*Documentos Oficiales\**

SEXTA COMISION  
38a. sesión  
celebrada el  
martes 3 de noviembre de 1987  
a las 15.00 horas  
Nueva York

**ACTA RESUMIDA DE LA 38a. SESION**

Presidente: Sr. AZZAROUK (Jamahiriya Arabe Libia)

**SUMARIO**

TEMA 135 DEL PROGRAMA: INFORME DE LA COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL SOBRE LA  
LABOR REALIZADA EN SU 39° PERIODO DE SESIONES (continuación)

TEMA 130 DEL PROGRAMA: PROYECTO DE CODIGO DE CRIMENES CONTRA LA PAZ Y LA SEGURIDAD  
DE LA HUMANIDAD (continuación)

\*La presente acta está sujeta a correcciones. Dichas correcciones deberán enviarse, con la firma de un miembro de la delegación interesada, dentro del plazo de una semana a contar de la fecha de publicación, a la Jefa de la Sección de Edición de Documentos Oficiales, oficina DC2-750, 2 United Nations Plaza, e incorporarse en un ejemplar del acta.

Las correcciones se publicarán después de la clausura del período de sesiones, en un fascículo separado para cada Comisión.

87-56686 6723g

22 p.

Distr. GENERAL  
A/C.6/42/SR.38  
12 de noviembre de 1987  
ESPAÑOL  
ORIGINAL: FRANCES

/...

Se declara abierta la sesión a las 15.10 horas.

TEMA 135 DEL PROGRAMA: INFORME DE LA COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL SOBRE LA LABOR REALIZADA EN SU 39° PERIODO DE SESIONES (continuación) (A/42/10, A/42/498, A/42/429 y A/42/179)

TEMA 130 DEL PROGRAMA: PROYECTO DE CODIGO DE CRIMENES CONTRA LA PAZ Y LA SEGURIDAD DE LA HUMANIDAD (continuación) (A/42/484 y Add.1)

1. El Sr. CORELL (Suecia), hablando en nombre de los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia), dice que la Sexta Comisión y la Comisión de Derecho Internacional se beneficiarían si se estableciera entre ellas un diálogo en el curso del cual la Sexta Comisión podría impartir directrices generales sobre la labor futura y los métodos de trabajo de la CDI. El diálogo permitiría asimismo analizar los trabajos realizados por la Sexta Comisión y la CDI y pasar revista a los criterios de distribución de los distintos temas entre esos dos órganos y sus comités especiales, con objeto de contribuir más eficazmente al desarrollo progresivo del derecho internacional.

2. En lo que toca a las relaciones entre la labor de la CDI y la de la Sexta Comisión, el Sr. Corell se pregunta, con carácter general, si la labor de esta última no podría organizarse de forma que contribuyera más eficazmente a la de la CDI. Cabe preguntarse si el tiempo asignado a la Sexta Comisión se utiliza de la forma más racional posible. Por ejemplo, la Subcomisión sobre buena vecindad ha consagrado mucho tiempo a esa cuestión. Numerosas delegaciones opinan que su aportación a la codificación del derecho internacional será más bien modesta. Existe, evidentemente, un problema de desproporción, como consecuencia del cual se estudian determinadas cuestiones tan secundarias como la antes mencionada en detrimento de otras tan importantes como el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación y la responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional. Quizá fuera más conveniente examinar también esas cuestiones más detenidamente en la Sexta Comisión, es decir, en el marco de los grupos de trabajo creados en cada período de sesiones de la Asamblea General. El Sr. Corell desea conocer la opinión de las otras delegaciones y de los miembros de la CDI sobre la cuestión.

3. Por lo que se refiere al informe de la CDI propiamente dicho, los países nórdicos expresan su satisfacción por la labor realizada por la Comisión en su 39° período de sesiones. En el momento oportuno, Finlandia, Islandia y Noruega formularán respectivas declaraciones sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación y el proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad.

4. La Asamblea General, en su resolución 41/81, ha pedido a la CDI que examine exhaustivamente la planificación de sus actividades y métodos de trabajo, de conformidad con los deseos expresados por varias delegaciones. Ello prueba que cada vez se presta más atención a la necesidad de racionalizar los métodos de

/...

(Sr. Corell, Suecia)

trabajo. Los países nórdicos celebran que la CDI haya constituido un Grupo de Trabajo especial sobre los métodos de trabajo y que haya atendido sin demora la petición que le ha hecho la Asamblea General, en su resolución 41/81, de mejorar los medios de comunicación con la Asamblea, y más concretamente con la Sexta Comisión. Es muy útil que la CDI invite a las delegaciones a formular observaciones sobre determinadas cuestiones.

5. Por lo que se refiere a la planificación de las actividades futuras de la CDI, los países nórdicos consideran realistas las pautas impartidas para el período quinquenal en curso. Con todo, quizá convendría reorientar las prioridades en un caso concreto, pues, tras el accidente nuclear de Chernobyl, los países confían cada vez más en que las Naciones Unidas y otros organismos internacionales hagan frente a los peligros para el medio ambiente que conlleva la era industrial. En efecto, la modernización industrial ha puesto de relieve la necesidad de resolver los problemas jurídicos vinculados a las actividades peligrosas para el hombre y el medio ambiente. De ahí el interés que reviste la cuestión de la responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional. A ese respecto, no hay que temer que la labor del Organismo Internacional de Energía Atómica sobre la materia entrañe riesgos de duplicación. La CDI debe tratar de elaborar una convención que establezca normas y pautas de carácter general, aunque también es necesario contar con una convención más específica que regule cuestiones como los perjuicios derivados de los accidentes nucleares.

6. En lo que toca al derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación, los países nórdicos celebran que la CDI haya aprobado provisionalmente un conjunto de artículos sobre la materia.

7. Volviendo a las cuestiones relativas a la organización de los trabajos, el Sr. Corell toma nota de que la CDI, en el párrafo 234 de su informe, menciona la posibilidad de escalonar el examen de algunos temas, como se preveía en la resolución 41/81 de la Asamblea General. Se pregunta, no obstante, por qué la Comisión no ha estimado necesario formular una propuesta en ese sentido, tanto más cuanto que su volumen de trabajo es ya elevado y una decisión sobre la cuestión contribuiría a aumentar desde ahora la eficacia de su labor.

8. En el párrafo 246 de su informe, la CDI hace asimismo referencia a las propuestas relativas a la presentación de sus informes a la Asamblea General. Esas propuestas deben estudiarse más adelante. El informe podría acortarse si en la presentación de cada uno de los temas se suprimieran numerosas referencias históricas, que sólo están justificadas cuando la CDI presenta un conjunto de artículos en primera lectura. Además, tras la aprobación en primera lectura de proyectos de artículos sobre un tema estudiado en su conjunto, la CDI debe elaborar un documento sintético que, refiriéndose no solamente a los proyectos de artículos sino también a los comentarios explicativos de dichos artículos, permita a los Estados Miembros preparar fácilmente sus comentarios.

9. Las delegaciones nórdicas apoyan la propuesta de distribuir con antelación la presentación del informe de la CDI por su Presidente, a fin de que las delegaciones puedan preparar sus observaciones y declaraciones sobre las diversas cuestiones

/...

(Sr. Corell, Suecia)

inscritas en el programa de la CDI, pues el informe final no se les envía hasta mediados de octubre. El Presidente de la CDI tendría así más posibilidades de resaltar ante la Sexta Comisión los puntos que revisten especial interés.

10. Naturalmente, la CDI, a semejanza de otros órganos de las Naciones Unidas, debe tener presentes las dificultades financieras de la Organización. Sin embargo, la Asamblea General no debe olvidar que el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional es una labor extremadamente importante, que exige métodos de trabajo racionales y todos los servicios razonables. Para cumplir su misión, la CDI necesita tiempo, as como el apoyo de la División de Codificación. Los países nórdicos comparten la opinión de la CDI sobre la cuestión.

11. Finalmente, el Sr. Corell dice que la labor de la CDI debe encaminarse hacia la codificación del derecho internacional, apoyándose en el derecho consuetudinario y en un trabajo prudentemente innovador. Ese derecho, interpretado por órganos independientes e imparciales, contribuirá al arreglo pacífico de controversias entre Estados soberanos. Tal es el espíritu con que los países nórdicos contemplan los trabajos de la Sexta Comisión y de la CDI.

12. El Sr. WATT (Reino Unido), refiriéndose a la cuestión del derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación, se congratula de la orientación general de la labor de la CDI sobre la cuestión.

13. El Sr. Watts se refiere en primer lugar al párrafo 2 del comentario sobre el proyecto de artículo 2 y señala que la CDI se ha contentado con proseguir su labor sobre la base de la hipótesis de trabajo relativa a la definición de los "sistemas de cursos de agua internacionales" aprobada en 1981. Esa forma de proceder es muy satisfactoria en la etapa actual del estudio de la cuestión. Aunque quizá no sea necesario, ni incluso posible, llegar a un acuerdo sobre una definición formal, el hecho de haber identificado muy pronto la noción fundamental es, habida cuenta de las circunstancias, un requisito indispensable para progresar.

14. En segundo lugar, los proyectos de artículos se han aprobado provisionalmente partiendo de la base de que han de desembocar en un "acuerdo marco". Ello significa que se aprobarían normas generales supletorias aplicables a los cursos de agua internacionales, pero redactadas en una forma que permita a los Estados interesados en un curso de agua dado completarlas por medio de acuerdos independientes. Ese criterio es esencial, habida cuenta de las muchas particularidades de carácter económico, político y ecológico que presentan los cursos de agua internacionales.

15. Sin embargo, quizá sea deseable ir más lejos. El Sr. Watts no cree que se puedan establecer reglas generales vinculantes, aunque sean de carácter supletorio. Quizás sea más realista formular determinadas recomendaciones o directrices en las que los Estados podrían inspirarse para negociar acuerdos relativos a los cursos de agua de los que son ribereños. Habría que reconsiderar, como mínimo, las disposiciones del párrafo 1 del proyecto de artículo 4, que definen los acuerdos independientes como aquellos que "apliquen y adapten las disposiciones de los presentes artículos". Una interpretación restrictiva de esos

/...

(Sr. Watt, Reino Unido)

dos verbos podría llevar a considerar que sólo permiten aplicar los artículos tal como han sido concebidos, o aplicarlos a reserva de adaptaciones convenidas de común acuerdo. Ahora bien, la noción de "adaptación" podría excluir la posibilidad de no aplicar en modo alguno los artículos. El Sr. Watts opina que con ello se restringiría indebidamente el derecho de los Estados del curso de agua de firmar un acuerdo que consideren mejor adaptado a sus circunstancias particulares aunque no respete las normas generales que pudieran enunciarse en los artículos.

16. En tercer lugar, el proyecto de artículo 5 establece el derecho del Estado del curso de agua a participar en la negociación de cualquier acuerdo en el que tenga algún interés, así como en las consultas pertinentes. El Sr. Watts se pregunta cómo puede aplicarse ese derecho en la práctica. Cabe preguntarse, por ejemplo, si, cuando dos Estados del curso de agua celebran reuniones bilaterales de consulta sobre el funcionamiento de un acuerdo relativo al sistema del curso de agua en su totalidad, un tercer Estado del curso de agua tiene siempre, en virtud del párrafo 1 del proyecto de artículo 5, el derecho de participar en dichas consultas. Ciertamente, la mencionada disposición limita el derecho de participación a las "consultas pertinentes", lo que podría interpretarse como referido únicamente a las consultas relativas a acuerdos en curso de negociación, con exclusión de las consultas sobre acuerdos ya vigentes. Si ese es el caso, la disposición debería redactarse más claramente. Sin embargo, aún suponiendo que se contemplen únicamente las consultas relativas a las negociaciones en curso, no es muy realista tratar de excluir la posibilidad de que dos Estados con intereses comunes especiales celebren consultas bilaterales.

17. El derecho de un Estado a participar en las consultas en virtud del párrafo 2 del proyecto de artículo está determinado por el hecho de que el uso del curso de agua por dicho Estado pueda verse afectado "apreciablemente". Es difícil, desde luego, hallar un adjetivo preciso. Sin embargo, la CDI debería sustituir el término por otro, porque los significados que le atribuye en distintas partes de su informe no son del todo coherentes. Por ejemplo, en los párrafos 15 y 16 del comentario sobre el proyecto de artículo 4, la CDI dice que el término "apreciablemente", aunque entraña un "verdadero menoscabo del uso", no se emplea en el sentido de "considerablemente". Sin embargo, en el párrafo 130 de su informe, dice que el riesgo considerado tiene que ser "de cierta magnitud", lo que es difícil de conciliar con el hecho de que no sea "considerable". La CDI podría quizá revisar el empleo de dicho término en esos dos contextos.

18. En lo que toca al proyecto de artículo 10, relativo a la obligación general de cooperar, que ha sido examinado y no aprobado provisionalmente, el Reino Unido no pone en tela de juicio la conveniencia de que los Estados cooperen, tanto en lo relativo a los cursos de agua internacionales como en los demás aspectos de las relaciones internacionales, pero no alcanza a comprender a qué fin práctico obedece la intención de transformar esa noción en una obligación jurídica general, como tampoco el significado real de una obligación de esa naturaleza ni la forma de hacerla respetar. Habida cuenta de los problemas que esa disposición suscita y de su falta de utilidad práctica, el Reino Unido se pregunta si no sería mejor suprimirla. El Relator Especial estima que puede modificarse y precisarse la redacción de ese artículo, y hay que confiar en que al hacerlo tenga presente la posibilidad de aplicación práctica de todo artículo sobre esa cuestión.

/...

(Sr. Watt, Reino Unido)

19. En lo que toca a las relaciones entre Estados y organizaciones internacionales, el Reino Unido sigue dudando que sea posible realizar un trabajo útil e importante sobre la cuestión. Habida cuenta del gran número de cuestiones importantes incluidas en el programa de la CDI, el orador no cree que la Comisión deba atribuir prioridad alguna a dicha cuestión. El Reino Unido es tanto más escéptico cuanto que existe toda una gama de tratados, como la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados, con sus numerosos anexos relativos a los diversos organismos, así como muchos otros acuerdos internacionales relativos a los privilegios e inmunidades de otras organizaciones internacionales, incluidos los diversos acuerdos relativos a la sede firmados entre las organizaciones y los Estados interesados. Evidentemente, sería inadmisibles poner en entredicho el estatuto o la validez de dichos acuerdos. Eso es precisamente lo que la CDI debe evitar. En esas condiciones, el alcance de su labor sobre la cuestión es necesariamente insignificante, en la medida en que cada una de las organizaciones internacionales tiene sus propias exigencias. Corresponde a los Estados miembros de cada una de las organizaciones decidir por sí mismos los privilegios e inmunidades que cada organización necesita. Por lo demás, a menudo se inspiran en el ejemplo de las organizaciones ya existentes. Por consiguiente, el Reino Unido comparte la opinión de que la CDI debe limitarse a brindar a los Estados y a las organizaciones internacionales pautas y recomendaciones sobre la materia.

20. Por lo que se refiere a las cuestiones de organización, el Reino Unido deplora que la CDI no haya respondido a las esperanzas en ella depositadas. Ciertamente, la CDI renovada ha necesitado tiempo para asentarse, y su período de sesiones del presente año sólo ha durado 11 semanas; sin embargo, la reducción de su programa es fruto del azar. Nada permite suponer que en el futuro ocurrirá lo mismo. Por lo demás, el Reino Unido se preocupa de la repercusión negativa de los traslados de personal en la División de Codificación de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Organización, pero confía en que el Asesor Jurídico haga todo lo posible por dotar a la División de Codificación y al resto de la Oficina de Asuntos Jurídicos de los funcionarios más competentes.

21. En lo que respecta a la labor futura de la CDI, el Reino Unido toma nota, con interés, de que la Comisión ha abordado la cuestión de la planificación de sus actividades y ha proporcionado ciertas indicaciones sobre los progresos que espera realizar en el curso de los próximos cuatro años. Sin embargo, parece que la CDI se ha mostrado muy optimista. Sería deseable que ello no fuera sino una impresión, pues el Reino Unido espera que la Comisión dé el mayor impulso posible a su labor durante el mandato de sus actuales miembros.

22. El orador señala, finalmente, que la Sexta Comisión tiene el deber de ayudar a la CDI a realizar los progresos que todos esperan de ella, y con ese objeto delibera sobre su informe. Ahora bien, dicho informe le ha sido presentado, una vez más, con excesivo retraso, y las delegaciones, si no cuentan con el tiempo necesario para estudiarlo, no pueden proceder a un intercambio útil de opiniones sobre la labor de la CDI. El Sr. Watts manifiesta la esperanza de que la CDI haga en el futuro lo posible por presentar su informe con la debida antelación.

23. El Sr. LUKYANOVICH (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) hace referencia al memorando presentado por su país relativo al desarrollo del derecho internacional (A/C.6/41/5).

24. El proyecto de artículos sobre el estatuto del correo diplomático y de la valija diplomática no acompañada por un correo diplomático, que fue aprobado en primera lectura, podría constituir una buena base para la elaboración de una convención sobre la materia. Este es un tema al que la Unión Soviética atribuye la mayor importancia.

25. En lo que respecta al artículo 18, la delegación soviética desea señalar que la necesidad de que el correo diplomático pueda beneficiarse de la inmunidad de jurisdicción penal del Estado receptor o de tránsito se debe a que el correo debe estar en condiciones de desempeñar sus funciones sin obstáculos y resulta de su estatuto de funcionario utilizado para asegurar las relaciones oficiales con los órganos de representación. Únicamente el Estado que envía puede renunciar a la inmunidad del correo diplomático. Además, las inmunidades concedidas al correo diplomático no deben ser inferiores a las concedidas al personal administrativo y técnico. Por último, hay que tener presente que la CDI ha previsto garantías jurídicas contra el abuso de los privilegios y las inmunidades del correo diplomático.

26. El artículo 28 debe establecer no sólo que la valija diplomática no podrá ser abierta ni retenida, sino también que estará exenta de toda inspección, ya sea directamente o por medios electrónicos u otros medios técnicos. Es inaceptable tratar de aplicarle el régimen de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares que establece la posibilidad de abrirla y devolverla a su lugar de origen. El Estado receptor y el Estado de tránsito disponen de medios suficientes para impedir los abusos y, en caso de infracción, pueden de todas formas, tomar las medidas correspondientes que sean necesarias.

27. A pesar de los resultados concretos obtenidos en el 39° período de sesiones, la decisión tomada por la CDI con respecto a la elaboración del proyecto de artículos sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación suscita dudas. Deberían precisarse los conceptos fundamentales antes de proseguir con la elaboración de nuevos artículos y con el examen a fondo de la cuestión. La expresión "cursos de agua internacionales", por ejemplo, se presta a confusión debido a la analogía con los ríos internacionales que sugieren un régimen en el cual el río puede ser utilizado no sólo por los Estados ribereños, sino también por otros Estados. Una expresión como la de "cursos de agua plurinacionales" permitiría evitar esta confusión.

28. Además, sólo cuando se haya elegido entre las fórmulas de "curso de agua internacional" y "sistema del curso de agua internacional" se podrá desarrollar el tema en su conjunto y seleccionar la forma que deberá adoptar el futuro instrumento. Este último concepto es demasiado vago y, en el caso de los Estados de pequeña o mediana dimensión, se corre el riesgo de llegar a una situación absurda, es decir, que todos los recursos hídricos de dichos Estados se sometan a una reglamentación internacional.

/...

(Sr. Lukyanovich, URSS)

29. Asimismo, habría que precisar si la expresión "para fines distintos de la navegación" debe entenderse en su sentido estricto o en su sentido lato. En este último caso, también habría que examinar las cuestiones relativas a la protección y a la utilización racional de las aguas. Además, debe velarse por que las disposiciones que se elaboren no den derecho alguno de injerencia en la actividad económica del Estado ribereño, particularmente con respecto a la distribución de los recursos biológicos del curso de agua que compete exclusivamente a dicho Estado.

30. Sería también el momento de acordar la forma que deberá adoptar el futuro instrumento. A ese respecto, la delegación soviética estima que la CDI debe elaborar principios generales que tengan carácter de recomendación y que permitan a los Estados escoger entre diversas opciones en función de las condiciones particulares de cada caso concreto.

31. Con respecto al tema que se está estudiando, la expresión "recurso natural compartido" es incompatible con el principio de la soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales. No puede aceptarse tampoco la idea según la cual únicamente el recurso a esta noción permitiría impedir que resultasen afectados los intereses de los otros Estados ribereños. El principio esencial al respecto es el de la cooperación entre Estados soberanos.

32. La obligación general de cooperar enunciada en el artículo 10 tiene una importancia fundamental, por una parte, para impedir que la actividad tenga consecuencias negativas para los otros Estados ribereños y por otra para asegurar la utilización óptima del curso de aguas para beneficio de todos. El futuro instrumento debe procurar que la cooperación sea un principio general que implique obligaciones de carácter general, y debe mantener un equilibrio justo entre ese principio y todos los otros principios del derecho internacional que se relacionan con el tema, de los cuales algunos, y particularmente el de la soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales, no están suficientemente reflejados en los proyectos de artículo hasta ahora propuestos.

33. El Sr. TREVES (Italia) señala que si entre los elementos que han de tomarse en cuenta para la elaboración del proyecto de artículos sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación, se considerara de importancia primordial la soberanía del Estado sobre el territorio en el cual se encuentra una porción determinada de un curso de agua internacional, todos los problemas podrían solucionarse mediante la aplicación de las normas sobre la soberanía territorial y sobre la responsabilidad internacional, aunque el examen del tema por la CDI ya no tendría sentido. Hay que reconocer que los intereses de ciertos Estados a los cuales pertenecen las aguas de un curso de agua internacional pueden verse afectados por los usos del caudal del mismo curso de agua por otros Estados, e incluso que su utilización por el conjunto de Estados del curso de agua puede afectar los intereses de la comunidad internacional en su conjunto. Esta situación requiere que se establezca un equilibrio justo entre las diversas normas jurídicas.

34. Incluso si se tienen opiniones diferentes sobre la cuestión de determinar en qué medida el derecho internacional consuetudinario ya aborda este tema, parece que ciertos principios generales, como el de la utilización equitativa y razonable del

/...



(Sr. Treves, Italia)

curso de agua internacional y sus corolarios, a saber, las obligaciones de consulta y de cooperación, ya forman parte del derecho consuetudinario o están pasando a serlo. Sin embargo, la intervención de la CDI resulta útil para sistematizar, aclarar y desarrollar dichos principios. El hecho de que los principios generales en cuestión se basen sobre conceptos necesariamente imprecisos hacen que adquiera particular importancia la adopción de normas de procedimiento concretas para darle un carácter práctico a esos principios.

35. Si bien en el pasado Italia consideró que era suficiente que la CDI elaborara normas tipo, este país suscribe la decisión tomada en el artículo 4, a saber que el proyecto de artículos debe establecer obligaciones apremiantes de carácter supletorio.

36. La delegación de Italia considera prudente la decisión de la CDI de dejar de lado provisionalmente el artículo primero relativo a los términos empleados y utilizar la hipótesis de trabajo adoptada en 1980. Espera, sin embargo, que cuando la CDI vuelva a examinar el tema, no tenga que aceptar un concepto más restringido del curso de agua internacional.

37. La delegación de Italia suscribe, en general, los artículos 4 y 5 relativos a los acuerdos de curso de agua. Debe prestarse particular atención a la situación de los Estados que no son partes en un acuerdo especial de curso de agua. El párrafo 2 del artículo 4, que enuncia un principio de base y el párrafo 2 del artículo 5, que enuncia normas de procedimiento, deben ser examinados conjuntamente. Estos dos párrafos también están relacionados con las normas de procedimiento relativas al nuevo uso enunciado en los artículos 11 a 15. Debería destacarse claramente que estas normas se aplican también al nuevo uso que resulte de un acuerdo especial de curso de agua. El párrafo 2 del artículo 5 es totalmente compatible con los procedimientos enunciados detalladamente en los artículos 11 a 15 y estos procedimientos deberían ser utilizados para alcanzar los objetivos específicos fijados en este párrafo para los nuevos usos que resulten de los acuerdos especiales de curso de agua.

38. El artículo 6 es una de las disposiciones esenciales del proyecto, y la delegación de Italia suscribe su formulación actual. Las observaciones que aclaran, en el comentario, el sentido de la expresión "utilización óptima" son particularmente importantes y deberían reflejarse en el texto mismo del proyecto de artículos.

39. La lista de factores que figura en el artículo 7 parece ser satisfactoria, en la medida en que ésta no tenga un carácter restrictivo.

40. Con respecto al artículo 10, que es una de las disposiciones más importantes del proyecto de artículos, la delegación de Italia estima que la actual práctica internacional permite afirmar que la obligación de cooperar está contemplada en el derecho consuetudinario.

41. La delegación de Italia no está convencida de que al sustituir en el artículo 11 la expresión "perjuicio apreciable" por la expresión "efecto adverso", se logre disipar las dudas planteadas en el párrafo 103 del informe con respecto

/...

(Sr. Treves, Italia)

al "mecanismo de activación" de la obligación de notificar en virtud de este artículo. Esta modificación no destaca lo suficiente el carácter fáctico y no jurídico del criterio. La mejor solución en ese caso sería indicar que todos los nuevos usos deben ser notificados. Por lo tanto, habría que incluir en el proyecto de artículos una definición de los nuevos usos; teniendo esto en cuenta debería examinarse la definición que figura actualmente en la nota al pie de la página 50 del informe.

42. Si bien la opinión de la CDI ha sido siempre suprimir el párrafo 3 del artículo 14 y el párrafo 3 del artículo 15, relativos a las cuestiones de la responsabilidad (véase A/42/10, párrs. 113 y 116), la delegación italiana estima que sencillamente deben dejarse de lado hasta que se aclaren los problemas de responsabilidad que se plantean dentro del marco del proyecto de artículos. Además, contrariamente a lo que señala el párrafo 116 del informe, esta delegación no considera que las razones que puedan justificar la supresión del párrafo 3 del artículo 14 se apliquen en el caso del párrafo 3 del artículo 15. La primera disposición establece la responsabilidad en caso de perjuicios causados tras la violación de las normas de procedimiento. Así pues, la situación considerada es la de un acto ilícito, al cual no se aplicarían las normas generales sobre la responsabilidad incluso si la disposición propuesta vincula la responsabilidad originada por la violación de las normas de procedimiento a un perjuicio que podría ser independiente de dicha violación. Desde este punto de vista, el argumento del excesivo rigor de la sanción presentada en el párrafo 113 parece ser válido. De todas formas, hubiera sido preferible examinar este tema con más detenimiento.

43. En lo que se refiere al párrafo 3 del artículo 15, éste establece la responsabilidad en caso de que el perjuicio haya sido a consecuencia de una actividad lícita, con sujeción a lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 del mismo artículo. Su supresión tendría como resultado en este caso la eliminación de toda responsabilidad. Esta es una cuestión que habría que examinar más adelante. Habría que precisar, en particular, si la suma urgencia mencionada en el párrafo 1 del artículo 15 equivale a las causas (de fuerza mayor o necesidad) que excluyen la ilicitud. Si fuera así, todo el artículo resultaría superfluo, a menos que se mantuviera el párrafo 3. Si este no fuera el caso (o si lo fuera en parte), el artículo 15 sería útil y la cuestión sobre el mantenimiento o la supresión del párrafo 3 sería una cuestión de fondo ya que enuncia un principio que conduce a un resultado opuesto al que se desprende de los principios generales sobre la responsabilidad.

44. El Sr. ROSENSTOCK (Estados Unidos de América) dice que el tema sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación es de los que permiten dar un sentido concreto a los conceptos verdaderamente progresistas de la interdependencia. Es, en efecto, la forma de abordar ese tipo de cuestiones lo que favorece o impide la interdependencia de los Estados a finales del siglo XX, más que los efectos de retórica relacionados con los nuevos sistemas de seguridad colectiva. No es muy importante que se utilice o no la expresión "recursos naturales compartidos", siempre que se reconozca que el agua es un recurso limitado y que deben elaborarse principios para que todos aquellos que lo utilizan obtengan el máximo beneficio. En cambio, no se reconoce

(Sr. Rosenstock, EE.UU.)

la interdependencia cuando se declara que el tema se refiere solamente a la vía principal de un curso de agua que atraviesa o que constituye una frontera, o cuando se defiende la doctrina Harmon, que data de finales del siglo XIX, como lo hizo un miembro de la CDI, o se invoca el principio de la soberanía sobre los recursos naturales para justificar una política de empobrecimiento de los Estados vecinos del curso superior, ni cuando se trata en un principio de limitar el alcance del tema y luego se afirma que habría que conformarse con formular recomendaciones y no elaborar normas. Se reconoce y se favorece la interdependencia y la seguridad cuando se admite que la igualdad soberana de los Estados sólo adquiere su verdadero sentido cuando se considera que los derechos al uso de un curso de agua internacional tienen correlación. El derecho de un Estado a utilizar un curso de agua tiene correlación con el derecho de los Estados del curso superior y del curso inferior de hacer lo mismo.

45. El derecho de cooperar pone de manifiesto en parte esta correlación, en la medida en que este derecho se conciba ampliamente y esté bien definido. Al respecto, es importante comprender que cuando se trata de usos distintos de la navegación, la parte visible de un curso de agua no constituye todo el curso de agua, y que un curso de agua se ve afectado, por ejemplo, cuando las aguas subterráneas que lo alimentan han sido desviadas o contaminadas. Al respecto, la delegación de los Estados Unidos está plenamente de acuerdo con el representante de Qatar.

46. Sigue existiendo la posibilidad de que los Estados concluyan acuerdos bilaterales y si, como raras veces ocurre, tienen la misma capacidad para negociar, pueden elaborar un arreglo viable. La CDI debería enunciar principios generales basándose en el hecho de que un curso de agua debe considerarse como parte totalmente inseparable de una cuenca hidrográfica. La delegación de los Estados Unidos opina que el texto elaborado por el Comité de Redacción, incluida la hipótesis de trabajo adoptada provisionalmente en 1980, es muy conservadora. Por el momento, todas las observaciones relativas al texto de los artículos 2 a 7 sólo pueden tener carácter preliminar o provisional. Ahora bien, los proyectos de artículo elaborados parecen reflejar en general una percepción correcta del alcance del tema y de su relación con la navegación. Cabe suponer que la contradicción entre el texto del artículo 3 y el comentario se resolverá a favor del texto.

47. La forma del acuerdo marco que se refleja en la orientación general del artículo 4 reconoce precisamente la diversidad de los sistemas de curso de agua y la consiguiente necesidad de dejar a los Estados suficiente libertad, por una parte, y la utilidad ampliamente reconocida de disponer de un marco de normas y de principios generales supletorios, ya que estos principios pueden facilitar la conclusión de acuerdos específicos entre Estados de un mismo sistema. La reserva que figura en el párrafo 2 del artículo 4 cae de su peso, pero quizás era útil formularla. Asimismo, respecto del artículo 5, el sentido común parece exigir que se determinen los posibles problemas antes y no después de la concertación del tratado. Por lo demás, la CDI podría preguntarse si los términos "que el uso pueda resultar afectado apreciablemente" conciernen al párrafo 1. ¿Se ven afectados necesariamente todos los Estados ribereños del curso superior por los acuerdos

(Sr. Rosenstock, EE.UU.)

celebrados entre los Estados del curso inferior, por más amplio que sea su alcance? ¿Debe suponerse que los términos "que se aplique a la totalidad del (sistema)" abarcan este punto? A este respecto el comentario debería ser más preciso.

48. Aunque resulta especialmente difícil hacer observaciones sobre los artículos 6 y 7 y del resto de artículos de la segunda parte, éstos parecen constituir una base sólida que refleja un enfoque correcto del problema en su conjunto. Deberían desarrollarse aún más los conceptos formulados en esos artículos, por ejemplo el de la obligación de cooperar. Por lo demás, debería elaborarse un artículo sobre la contaminación, que es uno de los principales problemas de los cursos de agua. La República Federal de Alemania declaró con toda razón que deberían tomarse en cuenta los debates actuales en la esfera de la contaminación transfronteriza.

49. En cuanto a los otros proyectos de artículo, sería prematuro, incluso aventurado, formular observaciones. Sin embargo, los debates sobre este tema en la CDI fueron muy instructivos. Las modificaciones propuestas con toda razón por el Relator Especial constituyen una síntesis positiva del debate y contribuirán al avance de los trabajos.

50. Sería prudente que la CDI examinara cuanto antes la cuestión sobre el arreglo de las controversias. El carácter muy general de las normas supletorias que se basan en términos como "cooperación", "buena fe", "utilización equitativa", probablemente haga necesaria la formulación de disposiciones de procedimiento detalladas para el arreglo de las controversias. Las declaraciones presentadas durante los dos últimos meses sugieren que un país cuya participación en los asuntos internacionales es muy importante, quizás haya cambiado fundamentalmente de actitud con respecto a los procedimientos de solución de controversias en las que intervienen terceras partes. Si ese cambio de actitud es tan fundamental como se supone, quizás sea posible utilizar un enfoque más decidido que el propuesto en el párrafo 111 del informe. La delegación de los Estados Unidos no se opone a que la CDI aplaze para una etapa posterior su decisión sobre la cuestión, tal como lo propuso el Relator; sin embargo, algunos gobiernos no estarán en condiciones de presentar observaciones definitivas sobre los proyectos de artículos hasta que tengan una idea de las disposiciones relativas al arreglo de las controversias. El ambiente actualmente es muy propicio para integrar dichas disposiciones en el proyecto en su conjunto.

51. Existen ciertos temas de los que se ocupa la CDI, que si bien son importantes, son tan amplios que los trabajos relacionados con éstos se realizan necesariamente con lentitud; existen otros de tan poca importancia, sobre cuestiones tan accesorias que cabría preguntarse si merecen el tiempo que se les dedica. Las cuestiones sobre los privilegios e inmunidades examinadas por la CDI forman parte de esta categoría. Además, al parecer no es muy útil elaborar un proyecto de artículos sobre la segunda parte del tema de las relaciones entre Estados y organizaciones internacionales. Existen acuerdos generales y, si fuera necesario, existen acuerdos bilaterales.

/...

(Sr. Rosenstock, EE.UU.)

52. Parece que el tema sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación no pertenece a ninguna de estas dos categorías, pero ocupa una posición intermedia que permite considerar la posibilidad de una contribución muy importante. Es un tema de tanta prioridad que la CDI debería terminar de examinarlo durante su mandato actual de cinco años. La delegación de los Estados Unidos, por lo tanto, pide urgentemente al Relator Especial que mantenga el mismo ritmo de trabajo, y al Grupo de Redacción que dedique más tiempo a la cuestión a fin de adaptarse al ritmo de trabajo del Relator Especial, antes de que termine el 40° período de sesiones de la CDI.

53. El Sr. HAYASHI (Japón) celebra que la CDI haya designado a dos relatores especiales para dos temas altamente prioritarios que no examinó en su último período de sesiones, a saber, la responsabilidad de los Estados y las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes.

54. La CDI ha podido mantenerse en la vanguardia de los esfuerzos realizados por la comunidad internacional en la esfera de la codificación y del desarrollo progresivo del derecho internacional porque sus miembros son todos eminentes juristas que tienen un conocimiento profundo y una amplia experiencia de la situación de los asuntos internacionales, así como una gran independencia con respecto a su país de origen. La práctica del consenso es también sumamente importante, ya que mediante ésta la CDI puede desempeñar eficazmente su misión y establecer un orden jurídico para la comunidad internacional en su conjunto.

55. Por otra parte, la CDI no puede examinar como debiera todos los temas incluidos en su programa. Asimismo, no podría examinar a fondo tema alguno si tratara de examinarlos todos en cada período de sesiones. La delegación del Japón opina que la CDI debería examinar en segunda lectura los dos proyectos de artículos respecto de los cuales efectuó la primera lectura, teniendo en cuenta plenamente las observaciones de los gobiernos. Además de estos dos temas, el de la responsabilidad de los Estados es el más importante y la delegación del Japón espera que se le conceda la atención que merece.

56. Con respecto al derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación, la delegación del Japón hace observar que los miembros de la CDI consideran en general que los trabajos sobre este tema deben orientarse a la elaboración de un acuerdo marco que serviría para coordinar los diversos usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación y es éste precisamente el objetivo que debe perseguir la CDI.

57. En cuanto al artículo 10 propuesto por el Relator Especial, y relativo a la obligación general de cooperar, no es posible, mientras no se haya determinado el alcance y los objetivos de dicho artículo, declarar que tales obligaciones generales existen en derecho internacional. Hay que celebrar que el Relator Especial haya tenido la intención de mejorar el texto al referirse particularmente a los objetivos específicos y a los objetivos de la cooperación. Los artículos 11 a 15 son importantes porque intentan codificar las normas de procedimiento para asegurar la aplicación efectiva de normas de fondo que ya han sido remitidas al Comité de Redacción. Por lo demás, es importante lograr un equilibrio razonable y

/...

(Sr. Hayashi, Japón)

equitativo entre los intereses del Estado que proyectan hacer nuevos usos de un curso de agua y los del Estado al cual se debe notificar ese uso. La delegación del Japón espera que la CDI tenga presente este punto y aclare los diversos conceptos que figuran en esos proyectos de artículos.

58. El Sr. HAYES (Irlanda) dice que a pesar de los numerosos años dedicados al examen del tema aún no ha podido concluirse la elaboración del proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad. Ahora bien, la delegación de Irlanda, por su parte, apoya la elaboración y la adopción de un código, ya que es necesario disponer de un conjunto de normas determinadas, aprobadas por la comunidad internacional, con respecto a las cuales puedan evaluarse ciertos actos y las afirmaciones según las cuales dichos actos constituyen crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad. Cabría desde luego esperar mucho más, pero esto únicamente justificaría la adopción de un código.

59. Con respecto a los objetivos, es necesario ser más realistas y dejar de lado el idealismo. Así pues, sin prejuzgar la evolución futura, el proyecto de código no debería considerar por ahora la responsabilidad penal de los Estados o la creación de una jurisdicción penal internacional. Esta posición supone el apoyo al primer párrafo de los artículos 3 y 4, pero no significa que deba suprimirse el segundo párrafo de ninguno de esos artículos. Entretanto, debería establecerse un sistema de jurisdicción universal para las infracciones de que se trata.

60. El proyecto de artículo 1 plantea, en inglés, un problema de terminología con respecto a los términos "crime" y "offence". Aunque para los legos en la materia el término "crime" parezca designar un hecho más grave, técnicamente ambos términos designan las infracciones de derecho penal en general. En el proyecto de código se plantea un problema de presentación y de coordinación lingüística y, en este caso, la delegación de Irlanda preferiría la utilización del término "crime" en lugar de "offence".

61. Asimismo, esta delegación apoya una definición conceptual de los crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, quizás junto con una lista ilustrativa. Por lo demás, los términos entre corchetes en el proyecto de artículo 1 son, en el mejor de los casos, superfluos y pueden dar lugar a confusión. Si no se pueden oponer objeciones razonables al contenido del artículo 2, su sentido podría expresarse implícitamente en el proyecto de artículo 1. Así, pues, debería mantenerse el artículo 2 por el momento, pero habría que volver a examinarlo una vez elaborado el artículo 1.

62. Es importante incluir el proyecto de artículo 6 que afirma el derecho de un acusado a las garantías mínimas en materia judicial. Esta disposición se ha mejorado, y el texto debería ajustarse en lo posible a las disposiciones pertinentes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a fin de evitar cualquier discrepancia en la interpretación.

63. Igualmente, el principio non bis in idem constituye una protección esencial para el acusado. Tal como se enuncia en el proyecto de artículo 7, éste sería apropiado para un sistema de jurisdicción universal. Si se crea una jurisdicción

(Sr. Hayes, Irlanda)

penal internacional habrá que preguntarse si conviene mantener este principio. En caso afirmativo, habrá que velar por que no se atente contra la primacía lógica del derecho penal internacional y de la jurisdicción penal internacional.

64. En lo que se refiere al derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación, la delegación de Irlanda considera que el enfoque adoptado es el más apropiado, puesto que las normas supletorias generales que constituyen el proyecto de acuerdo marco previsto deberían incluir una obligación general de cooperar. A ese respecto, la delegación irlandesa coincide con la de Qatar en que si bien no existe aún esta obligación en derecho internacional, se prestaría eminentemente a un intento de su desarrollo progresivo. Por lo demás, los conceptos tales como la utilización óptima, la utilización equitativa y razonable y la protección de los Estados del curso de agua contra los daños apreciables que resultan de un acuerdo entre otros Estados del curso de agua, son elementos esenciales para los trabajos sobre el tema.

65. La cuestión de la responsabilidad internacional de las consecuencias perjudiciales que resultan de actividades que no están prohibidas por el derecho internacional adquiere importancia para una comunidad internacional que trata de protegerse de los efectos, a veces negativos, del progreso técnico. La delegación de Irlanda apoya plenamente las conclusiones del Relator Especial, formuladas en el párrafo 194 del informe de la CDI. Teniendo en cuenta la situación del mundo moderno resulta necesaria la elaboración de un proyecto de convención sobre el tema. El Relator Especial reconoció en sus tres informes que dos principios opuestos son inherentes al tema; en primer lugar, un Estado tiene derecho a realizar actividades lícitas especialmente en su propio territorio, sin tener que rendir cuentas a otro Estado; en segundo lugar, y por el contrario, un Estado tiene el derecho de sacar provecho de sus propias instalaciones o recursos sin verse afectado por las actividades de otro Estado. Estos derechos no pueden ser absolutos los dos, puesto que si lo fueran entrarían en conflicto. Esos dos principios coexisten en el concepto "sic utere tuo ut alienum non laedas" que el Relator Especial acepta como base teórica del desarrollo progresivo del derecho sobre este tema. La delegación de Irlanda se suma también a esta opinión.

66. Se deben combinar las normas de prevención y de reparación. Sería injusto e ilógico establecer únicamente normas de reparación. Por lo demás, una norma de prevención sin la sanción correspondiente resultaría ineficaz en caso de violación. Así pues, la combinación de estas dos normas se desprende lógicamente del principio sic utere, pero responde también a las exigencias de justicia y eficacia. Por lo tanto, se justifica el establecimiento de un nexo entre ambas y esa relación conduce inevitablemente a introducir en el tema el concepto de "responsabilidad sin culpa" que existe tanto en common law como en derecho civil.

67. La responsabilidad sin culpa, incluso como se ilustra en el célebre caso Rylands contra Fletcher, no equivale a la responsabilidad absoluta, sino que designa más bien la responsabilidad que resulta de una relación causal entre la actividad y el perjuicio. En este caso, sólo se aplicaría si no existiera acuerdo entre los Estados implicados, en lo que se refiere a las actividades peligrosas. Su aplicación estaría determinada por negociaciones que tendrían en cuenta factores

/...

(Sr. Hayes, Irlanda)

que modificaran su carácter de responsabilidad sin culpa. Esta tendría un efecto disuasivo y sería entonces un elemento de prevención y de reparación. Además, aunque se adopte en numerosos sistemas jurídicos una norma mucho más rigurosa de responsabilidad sin culpa, nada en absoluto prueba que ello haya impedido desarrollar la ciencia y la tecnología en los países implicados.

68. En cuanto a las relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales, deberían proseguir los trabajos sobre la base del plan presentado por el Relator Especial. Cabe esperar que éste saque provecho de la libertad que le ha concedido la CDI y se ocupe conjuntamente de la codificación de las normas y prácticas vigentes y la determinación de las deficiencias existentes. Estos dos ejercicios útiles deben considerarse complementarios y no mutuamente excluyentes. Sin embargo, la delegación de Irlanda opina, como la del Brasil, que, desde el punto de vista de las prioridades, este tema se sitúa después de los objetivos fijados en el párrafo 232 del informe.

69. Con respecto a la sección D del capítulo VI del informe, la delegación de Irlanda celebra que la CDI haya cumplido con el párrafo 5 de la resolución 41/81 de la Asamblea General al examinar todas las sugerencias que figuran en ésta. Celebra también los esfuerzos realizados para facilitar la presentación de las opiniones de las delegaciones durante el debate anual de la Sexta Comisión. Al respecto, los párrafos 67 a 115 del informe han sido especialmente útiles para la delegación de Irlanda. Por lo demás, es conveniente que la CDI haya planificado sus actividades para la duración total de su mandato de cinco años.

70. Tomando nota de lo indicado en el párrafo 234 respecto de la responsabilidad de escalonar el examen de algunos temas, la delegación de Irlanda considera que ello facilitaría más a los relatores especiales la elaboración de sus informes, permitiría a los miembros examinarlos con anticipación y contribuiría a que los debates fueran más exhaustivos durante el período de sesiones de la CDI. Además, parece que las circunstancias actuales se prestan al escalonamiento. En segundo lugar, un escalonamiento no impediría la terminación de la primera lectura de los dos temas durante el mandato de cinco años como se ha previsto, ni frenaría los progresos en otros ámbitos. En tercer lugar, la cuestión del escalonamiento del examen de algunos temas debería ser examinada por la CDI al principio y al final de cada período de sesiones. Por último, el escalonamiento del examen a fondo de los temas no debería suponer un escalonamiento correspondiente de los trabajos del Comité de Redacción.

71. La delegación de Irlanda toma nota con interés de los planes de la CDI para facilitar la labor del Comité de Redacción, señalados en los párrafos 237 a 240, y espera que se estudie nuevamente la posibilidad de modificar la composición de acuerdo con los temas. Es necesario que la CDI disponga de los medios necesarios para desempeñar su labor, que sus informes sean examinados cada año y los gobiernos respondan a tiempo y detalladamente a las peticiones de presentación de observaciones que reciban.

72. El representante de Irlanda indica que su Gobierno ha decidido contribuir a la financiación del próximo Seminario sobre derecho internacional que se celebrará durante el 40º período de sesiones de la CDI.

/...



73. El Sr. OMAR (Jamahiriya Árabe Libia), con respecto al proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, hace observar que la delegación de Libia apoya el enfoque adoptado por la CDI en lo que respecta a la definición de esos crímenes sobre la base de una lista de actos y de una descripción precisa de cada una de las infracciones. Este método está de acuerdo con los principios del derecho penal y es preferible a las definiciones que se limitan a identificar los elementos fundamentales de los actos incriminados. En la definición se debe tener en cuenta la intención criminal, que es uno de los elementos fundamentales del crimen. El tribunal debe demostrar en cada caso la presencia de una intención criminal, ya que no cabe presumirla simplemente invocando la naturaleza sistemática y masiva del crimen.

74. En cuanto a la expresión "de derecho internacional", colocada entre corchetes en el texto, la delegación libia, aunque comprende las razones de quienes objetan esta expresión, cree que debe mantenerse con carácter provisional, habida cuenta de que la CDI, tal como ha indicado en el párrafo 17 de su informe, se propone limitar en esta etapa el alcance del proyecto a la responsabilidad penal de los individuos, sin perjuicio de un examen ulterior de la posible aplicación de la noción de responsabilidad internacional a los Estados. Además, conviene esperar que se termine el examen de la lista de crímenes.

75. Por otra parte, puede existir un vínculo entre el término "de derecho internacional" y el artículo 2, en donde se prevé que ciertos hechos pueden no estar calificados como crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad en la legislación de ciertos Estados. Por esta razón, el término "de derecho internacional" debe mantenerse provisionalmente, al menos hasta que finalicen los trabajos sobre el proyecto de código. En cuanto a la segunda oración del artículo 2, debía conservarse pues resulta más precisa que la primera.

76. El artículo 3 no suscita dificultades, tanto en lo que respecta a la responsabilidad del individuo como a la del Estado, aunque la expresión "independientemente de cualesquiera móviles invocados por el acusado" resulta superflua, pues los móviles figuran entre los aspectos objetivos puestos de relieve por los hechos. El artículo 5 no plantea dificultades.

77. La delegación libia apoya el artículo 6 que trata de las garantías judiciales mínimas a que tiene derecho todo acusado. No hay inconveniente en reafirmarlas en el proyecto de código, aunque se trate de uno de los principios reconocidos en cualquier legislación penal nacional. En relación con el artículo 7, la delegación libia cree que este artículo exige un estudio más a fondo habida cuenta de las dificultades que ha planteado. Parece que la norma de que trata este artículo es la aplicabilidad del principio non bis in idem en todos los casos, bien sea en presencia de un conflicto de competencias, o que ese conflicto se produzca entre un Estado y la jurisdicción penal internacional, en caso de que se cree dicha jurisdicción. Se admitiría una excepción a la norma en caso de descubrimiento de nuevos elementos de prueba desconocidos en el momento del primer proceso. La cuestión del orden de jurisdicción debería tratarse en lugar conveniente. Parece que la propuesta que figura en el párrafo 39 del informe de la CDI relativo a la adición de un segundo párrafo al artículo 7 no resuelve totalmente las dificultades

(Sr. Omar, Jamahiriya  
Arabe Libia)

experimentadas en el seno del Comité de Redacción. Este nuevo párrafo impediría invocar la excepción ante una jurisdicción penal internacional, y no parece existir una justificación razonable para una disposición de esa naturaleza. Por consiguiente, sería conveniente volver a examinarla.

78. Por lo que respecta a la elaboración del estatuto de una jurisdicción penal internacional para los individuos, la delegación libia no se opone a que se confíe dicha tarea a la CDI. No obstante, cree que ello debe depender de la terminación del proyecto de código. La CDI debe tener en cuenta los sistemas y prioridades cuando se plantean conflictos de jurisdicciones. En este contexto, la delegación libia apoya la propuesta de establecer un orden de prioridades para la extradición: en primer lugar figuraría el Estado en cuyo territorio se ha perpetrado el crimen, en segundo lugar el Estado cuyos intereses (o los intereses de sus nacionales) se hayan visto perjudicados, y, en tercer lugar, el Estado en cuyo territorio ha sido capturado el autor del crimen.

79. El Sr. Omar señala además a la atención de la Sexta Comisión la cuestión de la publicación de los fallos y de las opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia en otros idiomas oficiales de las Naciones Unidas. La delegación libia planteó esta cuestión en el cuadragésimo período de sesiones con miras a ampliar, especialmente en los países en desarrollo, los efectivos de quienes de este modo podrían entablar conocimiento con las actividades de la Corte Internacional de Justicia. Señala que la Dependencia Común de Inspección, en su informe (A/42/34), indicó que sería conveniente que estas publicaciones llegaran a un público más amplio y que sería posible conseguir este objetivo dentro de los límites de los recursos financieros disponibles.

80. El Sr. KEKOMAKI (Finlandia), hablando en nombre de las delegaciones de Dinamarca, Islandia, Noruega, Suecia y Finlandia, presenta algunas observaciones sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación. Recuerda que la CDI ha estudiado esta cuestión durante los últimos 13 años y ha examinado una multitud de puntos jurídicos y técnicos conexos. Sin embargo, los trabajos distan mucho de estar terminados.

81. Durante el período de sesiones de 1987, algunos miembros de la CDI han continuado preguntándose si la práctica de los Estados o las decisiones arbitrales constituían base suficiente para la elaboración de normas de derecho internacional obligatorio, aplicables a todos los cursos de agua internacionales. Esas dudas en cierto modo, están justificadas. Sin embargo, el derecho de los cursos de agua internacionales tienen una larga historia y sus fuentes no se limitan a la práctica reciente de los Estados ni a la jurisdicción arbitral moderna. Además, el mandato de la CDI en esta esfera, que figura en la resolución 2669 (XV) de la Asamblea General, es lo bastante amplio como para englobar no sólo la aplicación reciente del derecho de los cursos de agua internacionales, tanto en la práctica de los Estados como en la jurisprudencia internacional, sino también los estudios sobre la cuestión efectuados por organismos intergubernamentales y no gubernamentales.

/...

(Sr. Kekomaki, Finlandia)

82. En realidad, a principios del decenio de 1960 ya existía un cierto número de estudios y de proyectos relativos al derecho de los cursos de agua internacionales, siendo el más importante las Normas de Helsinki sobre los usos de las aguas de los ríos internacionales. En efecto, el objetivo de la iniciativa que llevó a la aprobación de esta resolución era utilizar principalmente estos estudios y proyectos para la codificación del derecho en la materia. Realizaron importantes trabajos los organismos no gubernamentales, tales como la Asociación de Derecho Internacional y el Instituto de Derecho Internacional, que estudiaron durante largos períodos el derecho internacional de los cursos de agua. La FAO, la CEE, el Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano y otras organizaciones internacionales han efectuado trabajos sobre el mismo tema. El valor de estos estudios reside en que han sido realizados por expertos en derecho internacional de los cursos de agua y se basan en una investigación profunda de todas las fuentes pertinentes.

83. Los informes anuales de la CDI indican que ha prestado atención a las recomendaciones de la Asamblea General y no cabe duda que los principios básicos y otras disposiciones de las Normas de Helsinki, así como otros estudios y proyectos, han influido de manera decisiva en sus trabajos. Ello es especialmente cierto en lo que se refiere a la doctrina de la utilización equitativa, que la CDI ha adoptado como base de su proyecto. A las delegaciones nórdicas les complace esta decisión, aunque juzgan que habría que volver a formular algunos proyectos de artículo.

84. Algunos miembros de la CDI han expresado dudas en cuanto a la posibilidad de redactar principios generales que se aplicarían universalmente a todos los cursos de agua. Para resolver el problema vinculado a la diversidad de los cursos de agua, la CDI ha considerado la elaboración de un acuerdo marco. Según este método, los Estados de un curso de agua podrían, mediante un acuerdo de curso de agua, aplicar y ajustar las disposiciones generales de los artículos del proyecto de convención a las características y usos de un curso de agua internacional determinado. En el informe de la CDI se explica que las disposiciones de fondo del proyecto de artículos tienen esencialmente un carácter supletorio. Este carácter secundario de las normas y principios generales se manifiesta también en la estructura del proyecto de convención, una de cuyas primeras disposiciones se refiere a los acuerdos de cursos de agua (artículo 4).

85. Las delegaciones nórdicas opinan que el sistema dualista de un acuerdo marco parece dejar el camino expedito a la ambigüedad. Además, tienen dificultades en aceptar que las normas y principios generales no tengan sino un carácter supletorio. En efecto, una convención futura puede contener disposiciones que permitan a los Estados del curso de agua reglamentar mediante un acuerdo sus relaciones mutuas en lo que respecta a la utilización de los cursos de agua de una manera que difiera de las normas y principios que rijan los usos generales, siempre que este acuerdo no resulte en una injerencia en los derechos e intereses de terceros Estados. Sin embargo, las delegaciones nórdicas no desean apoyar un sistema de acuerdo marco que eclipsaría la codificación del derecho de los cursos de agua internacional al atribuir una posición secundaria a las normas y principios generales, algunos de los cuales son elementos de derecho internacional consuetudinario perfectamente establecidos.

/...

(Sr. Kekomaki, Finlandia)

94. Con respecto a los proyectos de artículo 2 a 7, que la CDI aprobó provisionalmente en su 39° período de sesiones, el Sr. Kekomaki señala que se basan en disposiciones correspondientes que habían sido ya aprobadas provisionalmente por la CDI en 1980. La CDI ha indicado en su informe que recibiría con satisfacción los puntos de vista de los gobiernos sobre los proyectos de artículo adoptados provisionalmente. Algunos de estos - en especial los que refieren a la función de los acuerdos del curso de agua y al tenor de las aplicaciones del principio de la utilización equitativa - son los elementos más importantes de la convención futura y están tan estrechamente vinculados a ciertas disposiciones básicas que no se les puede hacer objeto de comentario sin antes disponer del texto revisado del proyecto de convención íntegro. Por lo que hace a cuestiones de detalle, algunos de estos artículos necesitarían de una nueva redacción, especialmente el artículo 6 y el artículo 9 que deberían formularse de manera que hubiera una relación entre ambos. En cuanto a las listas de los factores pertinentes en una utilización equitativa y razonable (artículo 7) no se considera que sea exhaustiva y ello parecería ser también válido para cualquier otra lista semejante elaborada por una organización internacional.

95. Los trabajos de la CDI sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación no ha podido progresar en su último período de sesiones con la rapidez prevista pues, tal como ha sucedido a menudo en el pasado, la CDI y su Comité de Redacción no han dispuesto de tiempo suficiente, habida cuenta de los complejos problemas de que se han tenido que ocupar. No obstante, el tercer informe del Relator Especial ha permitido de nuevo realizar un avance importante de los trabajos en esta esfera.

Se levanta la sesión a las 18.00 horas.